



**ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA  
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES**

**RESOLUCIÓN NÚMERO 109924 DE 2025**

(08 de octubre 2025)

*"Por medio de la cual se revoca la a Resolución No. 62795 del 18 de junio del 2025"*

**LA DIRECTORA DE OTRAS PRESTACIONES DE LA ADMINISTRADORA DE LOS  
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD –  
ADRES**

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos, 114 del Decreto Ley 019 de 2012 modificado por el Decreto Ley 2106 de 2019, en desarrollo el párrafo del artículo 2.6.1.4.3.14 del Decreto 780 de 2016, numeral 1º y 5º del artículo 17 del Decreto 1429 de 2016 y el numeral 2º del artículo 6º de la Resolución 1012 de 2022 y

**1. ANTECEDENTES**

- 1.1 Que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud- ADRES, mediante la **Resolución No. 62795 del 18 de junio del 2025**, ordenó el cobro al señor **JEISSON AGUILAR PARRA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1094904868, por valor de **CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. (\$169.670,85); valor indexado al mes de MAYO de 2025**, más los intereses causados a partir de la ejecutoria de dicho acto administrativo y hasta la fecha de su cancelación, por concepto de gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y/o indemnización reconocidos y pagados por el entonces Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA hoy ADRES, originados por accidente de tránsito ocurrido el día **10/09/2022** en el cual se vio involucrado el vehículo de placa **DCP47C** de propiedad del obligado, automotor que para la fecha de los hechos, no contaba con una póliza de seguro obligatorio SOAT.
- 1.2 En cumplimiento de lo dispuesto en el **artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)**, y conforme a las reglas establecidas en la **Ley 527 de 1999** sobre mensajes de datos y comercio electrónico, se efectuó la notificación electrónica de la **Resolución No. 62795 del 18 de junio de 2025**, citando al destinatario para que se presentara personalmente, o por medio de apoderado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación, en la sede de la ADRES ubicada en la **Avenida Calle 26 No. 69 – 76, Torre 1, Piso 16, Bogotá D.C.** La notificación se considera válidamente surtida, toda vez que el mensaje fue **enviado con estampilla de tiempo el 22 de agosto de 2025 a las 13:54:17, recibido en la bandeja de entrada del destinatario el mismo día a las 13:54:20, y abierto y leído el 23 de agosto de 2025 entre las 06:40:27 y las 06:41:08**, conforme al registro electrónico adjunto. Dichos eventos acreditan la recepción efectiva y lectura del mensaje, cumpliendo así los principios de validez, eficacia y debido proceso en materia de notificación electrónica.
- 1.3 En atención a que la **citación para notificación personal** de la **Resolución No. 62795 del 18 de junio de 2025** fue remitida al correo electrónico **jeiparra1927@hotmail.com** el **22 de agosto de 2025**, dirección que obra en el expediente y cuya remisión y entrega constan en el **Acta de Envío y Entrega de Correo Electrónico – Id. mensaje 820458** expedida por **4-72**, y verificado que **transcurrieron cinco (5) días hábiles** contados desde su envío **sin que el destinatario compareciera a notificarse personalmente**, esta entidad, **de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)**, procedió a **NOTIFICAR POR AVISO** el contenido íntegro de la citada Resolución.
- 1.4 Que, mediante **radicado No. 20256305460252 del 02 de octubre de 2025**, el señor presentó un **derecho de petición**, en el cual manifiesta que **no posee ninguna deuda** con la **Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES)**.

*"Por medio de la cual se revoca la Resolución No. 62795 del 18 de junio del 2025"*

1.5 Que con fundamento en los documentos que obran en el expediente, esta Dirección procederá a **revocar la Resolución No. 62795 del 18 de junio del 2025**, teniendo en cuenta que con su expedición se está afectando injustificadamente a una persona.

## 2. PROCEDENCIA DE LA REVOCATORIA

Que ésta revocatoria se dispone de conformidad con lo preceptuado por el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en cuanto expresa que: *"Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:*

- 1. *Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.*
- 2. *Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.*
- 3. **"Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona".**  
(Negrilla fuera de texto)

La revocatoria es la prerrogativa que tiene la administración para enmendar, en forma directa o a petición de parte, sus actuaciones contrarias a la ley o a la Constitución, que atenten contra el interés público o social o que generen agravio injustificado a alguna persona. Así mismo, en tanto que la administración puede extinguir sus propios actos por las causales previstas en la ley y está facultada para hacerlo en cualquier momento; adicionalmente es una obligación que forzosamente debe asumir en los eventos en que, de oficio, constate la ocurrencia de una de las causales señaladas. Si así fuere, la administración tiene el deber de revocar el acto lesivo de la constitucionalidad o legalidad o atentatorio del interés público o social o que causa agravio injustificado a una persona.

Sobre el particular, la Corte Constitucional mediante sentencia C-742 de 1999, M.P. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, precisa sobre la revocatoria directa lo siguiente:

*"(...) La revocación directa tiene como propósito el de dar a la autoridad la oportunidad de corregir lo actuado por ella misma, inclusive de oficio, ya no con fundamento en consideraciones relativas al interés particular del recurrente sino por una causa de interés general que consiste en la recuperación del imperio de la legalidad o en la reparación de un daño público. La persona afectada sí puede en principio pedir a la Administración que revoque su acto, o la autoridad puede obrar de oficio. Cosa distinta es que el interesado, a pesar de haber hecho uso de los recursos existentes, pretenda acudir a la vía de la revocación directa, a manera de recurso adicional, lo cual puede prohibir el legislador, como lo hace la norma acusada, por razones de celeridad y eficacia de la actividad administrativa (art. 209 C.P.) y además para que, si ya fue agotada la vía gubernativa, el administrado acuda a la jurisdicción.*

*... La revocación directa es la prerrogativa que tiene la administración para enmendar, en forma directa o a petición de parte, sus actuaciones contrarias a la ley o a la Constitución, que atenten contra el interés público o social o que generen agravio injustificado a alguna persona. Y es una prerrogativa en tanto que la administración puede extinguir sus propios actos por las causales previstas en la ley y está facultada para hacerlo en cualquier momento, incluso cuando el acto administrativo ya ha sido demandado ante lo contencioso administrativo; pero, también es una obligación que forzosamente debe asumir en los eventos en que, motu proprio, constatare la ocurrencia de una de las causales señaladas. Si así fuere, la administración tiene el deber de revocar el acto lesivo de la constitucionalidad o legalidad o atentatorio del interés público o social o que causa agravio injustificado a una persona. (...)"*

En el mismo sentido el Honorable Consejo de Estado en Sentencia con radicación número 25000-23-000-1998-3963-01 (5618-02), Consejero Ponente Alberto Arango Mantilla, consideró lo siguiente en cuanto a la revocatoria de los actos administrativos:

*"Por medio de la cual se revoca la Resolución No. 62795 del 18 de junio del 2025"*

*"Como se sabe, la revocación directa del acto administrativo es una potestad legal otorgada a una autoridad para hacer desaparecer de la vida jurídica las decisiones que ella misma ha expedido, **bien sea por razones de legalidad** o por motivos de mérito (causales). **Son razones de legalidad cuando constituye un juicio estrictamente lógico jurídico, esto es, cuando se hace una confrontación normativa, porque infringe el orden preestablecido que constituye el principio de legalidad (num. 1º del art. 69 del C.C.A.).** Y de mérito, cuando el acto es extinguido por razones de oportunidad, conveniencia pública, o cuando una persona determinada recibe un agravio injustificado (num. 2º y 3º ibidem)". (Subrayado y negrilla fuera de texto).*

Así mismo, la **sentencia 2013-00577 de 2020 proferida por el Honorable Consejo de Estado** dispuso lo siguiente:

**"De la revocatoria directa de los actos administrativos de carácter particular y concreto**

*En relación con los actos administrativos conviene recordar que se constituyen en la expresión unilateral de la voluntad de la Administración, dirigida a crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas generales de carácter abstracto e impersonal y de carácter particular y concreto respecto de una o varias personas determinadas o determinables.*

*Tanto los actos administrativos generales y abstractos como los particulares y concretos, pueden ser sustraídos del mundo jurídico por cuenta de las mismas autoridades administrativas que los profirieron, bien sea de oficio o a solicitud de parte, cuando como expresamente lo ordena el Artículo 69 del CCA: sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o la ley; no estén conformes con el interés público o social o atenten contra él; o si con ellos se causa agravio injustificado a una persona.*

*Específicamente en cuanto a los actos de contenido particular y concreto, se debe precisar que la Administración puede revocarlos, bien sea de manera directa o demandando su propio acto a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad, siempre y cuando se configuren las causales anteriormente descritas de que trata el Artículo [69](#)".*

En relación con el debido proceso, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-980 de 2010, ha señalado que el mismo no solo aplica al procedimiento judicial sino también a todas las actuaciones administrativas, y con ello a todo el actuar de la administración pública:

*"... la Constitución extiende la garantía del debido proceso no solo a los juicios y procedimientos judiciales, sino también a todas las actuaciones administrativas. Ello significa, que el debido proceso se mueve también "dentro del contexto de **garantizar la correcta producción de los actos administrativos, y por ello extiende su cobertura a todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública**, en la realización de sus objetivos y fines estatales, es decir, cobija a todas sus manifestaciones en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que realicen los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe desarrollar y desde luego, garantiza la defensa ciudadana al señalarle los medios de impugnación previstos respecto de las providencias administrativas, cuando crea el particular, que a través de ellas se hayan afectado sus intereses". (Negrilla y subrayado fuera de texto).*

"Por medio de la cual se revoca la Resolución No. 62795 del 18 de junio del 2025"

El Consejo de Estado- Sala de lo Contenciosa Administrativa- Sección Cuarta de 25 de octubre de 2017 se pronunció sobre las modalidades de revocatoria directa en la Sentencia 73001-23-31-000-2008-00237-01 señalando lo siguiente:

"(...) No obstante, del examen de la normativa positiva que la regula (artículos 69 a 74 del Código Contencioso Administrativa) se puede concluir que tiene dos modalidades: de un lado, como mecanismo de utilización directa por parte del sujeto pasivo del acto frente a la autoridad que lo produjo o ante su inmediato superior y, de otro, como medida unilateral de la Administración para dejar sin efecto decisiones adoptadas por ella misma. En el segundo caso, es un mecanismo ya no alternativo sino adicional al de la vía gubernativa, del que puede hacer uso la Administración de manera oficiosa, bajo ciertas circunstancias y limitaciones, para revisar y corregir la manifiesta antijuridicidad, inconveniencia, o el agravio injustificado que cause alguno de sus actos administrativos. Es, en efecto, un mecanismo unilateral de la administración otorgado por el legislador, con el fin de revisar sus propias actuaciones y, dentro del contexto de la actuación oficiosa, sacar del tránsito jurídico decisiones por ella misma adoptadas". Mediante esta figura, la Administración, de oficio o a solicitud de parte, deja sin efecto los actos administrativos expedidos por ella misma, por las causales y conforme con el trámite consagrado en la ley. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

3. CONSIDERACIONES DE ESTA DIRECCIÓN

Tal como se manifestó en la **Resolución No. 62795 del 18 de junio del 2025**, la obligación que ordena el cobro, tiene fundamento en el artículo 114 del Decreto Ley 019 de 2012, el cual facultó a esta Entidad para ordenar mediante acto administrativo, el cobro de los créditos a favor del Estado correspondientes a las reclamaciones reconocidas y pagadas por el entonces Fondo de Solidaridad y Garantía- FOSYGA, con ocasión de los daños corporales y/o indemnización por muerte y gastos funerarios, causados en Accidentes de Tránsito, como consecuencia del incumplimiento de la obligación de contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -SOAT vigente. Que según lo establecido en el artículo 192 del Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) y en concordancia con el artículo 42 de la Ley 769 de 2002, todo vehículo que transite en el territorio colombiano debe estar amparado por un seguro obligatorio de accidentes de tránsito- SOAT.

De acuerdo a lo anterior, y de conformidad con las normas que regulan el proceso de cobro que nos ocupa, se tiene que quien figure ante el Estado como propietario de un vehículo, es la persona responsable de cumplir con las obligaciones que se deriven de tal derecho, por consiguiente, el propietario inscrito de un automotor carente de SOAT que resulte involucrado en un accidente de tránsito, le corresponde asumir la responsabilidad frente a los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, que reciban los afectados en calidad de beneficiarios o víctima de tales siniestros, los cuales en su debido tiempo fueron asumidos par el Estado a través del entonces FOSYGA hoy ADRES, siendo por lo tanto procedente el proceso de repetición.

Que, tras la revisión del expediente y de la respuesta emitida al **derecho de petición radicado No. 20256305460252**, se evidencia la procedencia de la **revocatoria de la Resolución No. 62795 del 18 de junio de 2025**, mediante la cual se ordenó el cobro de las obligaciones reconocidas y pagadas por la ADRES. Dicha revocatoria se fundamenta en que la decisión adoptada genera un **agravio injustificado al señor JEISSON AGUILAR PARRA**, identificado con **Cédula de Ciudadanía No. 1094904868**, toda vez que, luego de la verificación del **Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT)**, se constató que el vehículo de placas **DCP47C** no era de su propiedad al momento del accidente.

DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	PROPIETARIO	ESTADO PROPIETARIO	ESTADO VEHICULO	FECHA INICIO PROPIEDAD	FECHA FIN PROPIEDAD	PLACA
1094904868	Cédula Ciudadanía	JEISSON AGUILAR PARRA	INACTIVO	ACTIVO	4/2/2011	22/7/2020	DCP47C
350969	Sin Registro		ACTIVO	ACTIVO	22/7/2020		DCP47C

*"Por medio de la cual se revoca la Resolución No. 62795 del 18 de junio del 2025"*

Según el historial de propiedad consultado en el RUNT, el señor **JEISSON AGUILAR PARRA** figuró como propietario del vehículo **desde el 4 de febrero de 2011 hasta el 22 de julio de 2020**, fecha en la que finalizó su titularidad. Posteriormente, el automotor continuó con estado **activo**, pero bajo **nuevo propietario**, mientras que el señor Aguilar Parra quedó con estado **inactivo** en el registro de propiedad vehicular.

En consecuencia, se determina que, para la fecha del **accidente de tránsito ocurrido el 10 de septiembre de 2022**, que dio origen al proceso de cobro, el señor **JEISSON AGUILAR PARRA no ostentaba la calidad de propietario** del vehículo **DCP47C**, razón por la cual **no es procedente continuar la actuación administrativa ni mantener el acto de cobro proferido en su contra**.

De conformidad con lo anterior, el acto administrativo que ordenó el cobro se encuentra enmarcado en la **causal tercera del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)**.

Por tanto, en aplicación de los principios de **legalidad, justicia material, buena fe y corrección de actuaciones administrativas**, se dispone **revocar lo ordenado mediante la Resolución No. 62795 del 18 de junio de 2025**, al verificarse de manera fehaciente y documentada que el vehículo **DCP47C** no era de propiedad del señor **JEISSON AGUILAR PARRA** en el momento del siniestro que originó la obligación por valor de **CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. (\$169.670,85)**, indexado al mes de mayo de 2025, más los intereses generados desde la ejecutoria del acto administrativo.

En virtud de lo anteriormente expuesto este Despacho:

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO: REVOCAR la Resolución No. 62795 del 18 de junio del 2025**, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

**ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar** al señor **JEISSON AGUILAR PARRA**, identificado con cédula de ciudadanía número 1094904868, el contenido de la presente resolución, en los términos de los artículos 67 y 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Destinatario	Dirección física y/o electrónica
JEISSON AGUILAR PARRA	Jeiparra1927@hotmail.com

**ARTÍCULO TERCERO: Comunicar** la presente decisión a la Dirección de Gestión de los Recursos Financieros de Salud y a la Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la ADRES, para que adelanten las actuaciones que correspondan en el marco de sus competencias.

**ARTÍCULO CUARTO: Comunicar** la presente decisión a la Oficina Asesora Jurídica, para que adelanten las actuaciones que correspondan en el marco de sus competencias, frente a las resoluciones que libraron el mandamiento de pago.





## RESOLUCIÓN NÚMERO 109924 DE 2025

HOJA No. 6 de 6

*"Por medio de la cual se revoca la Resolución No. 62795 del 18 de junio del 2025"*

**ARTÍCULO QUINTO: Indicar** que contra la presente resolución no procede recurso alguno.

Dada en Bogotá D.C., a los (08) días del mes de octubre de 2025.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



Firmado Digitalmente por  
**YASMÍN ESCAMILLA B.**  
Directora de Otras Prestaciones

*Revisó: Rafael Enrique Roa Pinzón - Abogado Contratista  
Elaboró: Simón Hinestroza - Abogado Contratista  
Expediente: JEISSON AGUILAR PARRA - C.C 1094904868*